

Estrategia Nacional para la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

**Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**

2017

INDICE

- I. Mensaje de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
 - Introducción a la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- II. Misión y Visión
- III. Glosario
- IV. Aspectos esenciales del sistema de coordinación nacional e internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
 - Coordinación nacional
 - Coordinación internacional
- V. Marco jurídico y regulatorio en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- VI. Conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgo de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo de Panamá.
 - Amenazas y vulnerabilidades de blanqueo de capitales en Panamá
 - Sectores Vulnerables: Sector no Financiero y Sector Financiero
 - Personas Jurídicas
 - Financiación del terrorismo y de la proliferación
- VII. Pilares de la Estrategia Nacional para la lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
 - Metodología:
 - Descripción de los pilares estratégicos.

VIII. Anexos

- Plan de acción para la ejecución de la Estrategia Nacional
- Agradecimiento
- Instituciones participantes
- Normativas

BORRADOR

Mensaje de La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación De Armas de Destrucción Masiva

La Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, *“Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”* introduce un marco actualizado y acorde a los más altos estándares internacionales de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de de armas de destrucción masiva, lo que es indicativo del alto compromiso del Gobierno de la República de Panamá por combatir este flagelo internacional. Al igual que esta ley, se han promulgado una serie de normativas como leyes, decretos ejecutivos, reglamentos y resoluciones, que fortalecen el marco normativo y regulatorio de prevención y demuestran que Panamá ha tomado a cabalidad la responsabilidad de conformidad con las normas internacionales emitidas sobre la materia.

En adición a robustecer el marco legal de prevención, el Gobierno de Panamá aprobó recientemente la Evaluación Nacional de Riesgo, pieza fundamental para identificar los sectores más vulnerables y con mayor riesgo al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Ello permitirá focalizar el uso de los recursos humanos y tecnológicos en el combate del blanqueo de capitales, además de fortalecer la estructura institucional para mitigar los riesgos y vulnerabilidades contra el blanqueo de capitales.

La presente Estrategia Nacional para la lucha contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de armas de destrucción masiva, es una clara acción para cumplir con las tareas que se han identificado para la prevención, detección y represión de las vulnerabilidades detectadas de nuestro sistema. La misma se fundamenta en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de Blanqueo de Capitales y financiamiento al terrorismo de Panamá, concluida y aprobada por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) en el año 2016, que tomó en consideración nuestras realidades, los riesgos identificados y las labores que deben iniciarse y concluir para perfeccionar la labor de combatir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

La economía de Panamá se caracteriza por sus fundamentos macroeconómicos estables, entre lo que destaca su sistema monetario bancario; ausencia de riesgo de cambio; tasas de interés cercanas a las tasas internacionales; baja inflación, y un crecimiento económico sostenido. Ello ha permitido atraer la inversión extranjera directa a nuestra economía, favoreciendo las condiciones propicias para un clima de negocios positivo y abierto a la inversión extranjera. En las dos últimas décadas, Panamá es una de las economías de mayor crecimiento regional, con impactos positivos en la generación de empleo y la reducción de los desbalances en la distribución del ingreso. Actualmente cuenta con calificación de Grado de Inversión Internacional de BBB con perspectiva estable otorgada por las principales agencias calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, Moody's y Fitch. La culminación del reciente proyecto de ampliación del Canal de Panamá es una

muestra palpable de las perspectivas positivas y viabilidad de nuestra economía en el corto, mediano y largo plazo.

Conscientes de las vulnerabilidades que encara una economía de servicios y la realidad geográfica de su ubicación entre bloques regionales de oferta y demanda de sustancias prohibidas, y organizaciones criminales que proceden y operan en otros países, nuestra economía puede ser utilizada para blanquear o financiar sus actividades. Por ello, Panamá ha identificado los sectores que tienen los mayores riesgos al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y presenta una Estrategia de cómo maximizar los recursos disponibles para combatir y mitigar este flagelo, y las tareas y acciones para fortalecer su capacidad institucional, además de robustecer la cooperación internacional contra el flujo ilícito de capitales.

El análisis se basa en la metodología de riesgo utilizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), filial regional del Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI). Con este análisis nacional de riesgo concluido, se ha procedido a preparar una estrategia, elaborada por un grupo interinstitucional con apoyo del Fondo Monetario Internacional, para mitigar o eliminar y/o controlar los riesgos identificados y delimitados en la ENR. Esta estrategia adoptada por la República de Panamá esta descrita a continuación en este documento.

El enfoque internacional se centra en tres grandes categorías de actividades que se busca eliminar. Primero es el blanqueo de capitales, que tiene hoy una multiplicidad de facetas desde el narcotráfico hasta el contrabando y la corrupción, entre muchas otras. Segundo, es el financiamiento del terrorismo, pues se ha visto que el terrorismo crece a nivel internacional solo si tiene recursos económicos para sustentarse. Finalmente, está el financiamiento de las armas de destrucción masiva cuyo uso por cualquier país o actor es condenado internacionalmente por su impacto inhumano, de ser usadas.

Panamá, al igual que en otros países, estas actividades se pueden originar domésticamente o en el extranjero. De estas tres actividades, todas condenadas por la comunidad internacional, han surgido las recomendaciones del GAFI, que sustentan numerosas acciones para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva.

Secretaría Técnica del CNBC

INTRODUCCIÓN:

La República de Panamá, por su posición geoestratégica, posee condiciones que favorecen el crecimiento económico y atraen la inversión directa extranjera. Por lo antes expuesto, se han actualizado y desarrollado nuevas normativas, con miras a prevenir que la delincuencia organizada utilice nuestra plataforma financiera, económica y profesional para realizar actividades ilícitas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El país cuenta, por primera vez, con una “Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales, y Financiamiento al Terrorismo de Panamá”, la cual identificó amenazas tanto nacionales como internacionales, que constituyen un desafío para el Estado panameño por lo cual, la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprueba la presente Estrategia Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Este documento es producto de un trabajo interinstitucional que reúne todos los esfuerzos nacionales en materia de prevención, inteligencia y detección, investigación y justicia penal, que contiene el plan de acción estratégico y técnico, con las herramientas necesarias dirigidas a proteger al país de los daños a la estabilidad social, financiera y reputacional, que estos delitos ocasionan.

Misión

Fortalecer las medidas de prevención, detección y represión del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para robustecer el sistema de coordinación nacional, a través de la implementación de las acciones estratégicas desarrolladas en el Plan de Acción.

Visión

Proyectar a Panamá como un centro financiero, comercial y logístico, siendo colaborador y garante de la aplicación de los estándares legales e internacionales, a través de una cultura nacional de prevención en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Glosario

ANA	Autoridad Nacional de Aduanas
APNFD	Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
BC	Blanqueo de Capitales
CICAD	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICTE	Comité Interamericano contra el Terrorismo
CNBC	Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
CNS	Consejo Nacional de Seguridad
CPTF	Comité de Prevención del Terrorismo y su Financiación
DIJ	Dirección de Investigación Judicial.
EBR	Enfoque Basado en Riesgo
FT	Financiamiento del Terrorismo
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
GAFISUD	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
GELAVEX	Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
IOSCO	Organización Internacional de Comisiones de Valores
IPACOOOP	Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
LA	Lavado de Activos
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MICI	Ministerio de Comercio e Industria
MINGOB	Ministerio de Gobierno
MOU	Memorando de Entendimiento
MP	Ministerio Público
OEA	Organización de Estados Americanos
OJ	Órgano Judicial
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSFL	Organización Sin Fines de Lucro
PADM	Proliferación de Armas de Destrucción masiva
PGN	Procuraduría General de la Nación
RCSNU	Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Resolución JD	Resolución de la Junta Directiva
ROS	Reporte de Operación Sospechosa
SBP	Superintendencia de Banco de Panamá
SENAFRONT	Servicio Nacional de Frontera
SMV	Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
SSRP	Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
UAF	Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del

	Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
UIF	Unidades de Inteligencia Financiera

BORRADOR

Aspectos Esenciales del Sistema de Coordinación Nacional e Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el Marco de los Estándares Internacionales.

Coordinación nacional:

El Sistema de Coordinación Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República de Panamá se implementó mediante la promulgación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, estableciendo cambios legales e institucionales, con fundamento en los estándares internacionales, incluyendo las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Sistema de Coordinación nacional está conformado por: la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y los Organismos de Supervisión.

CNBC

- ✓ Ministro de Economía y Finanzas,
- ✓ Ministro de Relaciones Exteriores,
- ✓ Ministro de la Presidencia,
- ✓ Superintendente de Bancos de Panamá,
- ✓ Procurador General de la Nación en representación del Ministerio Público,
- ✓ Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

FUNCIONES

1. Aprobar la Estrategia Nacional
2. Dar seguimiento al Plan Nacional de Evaluación de Riesgo
3. Establecer las políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN

- ✓ Superintendencia de Bancos de Panamá
- ✓ Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
- ✓ Superintendencia del Mercado de Valores
- ✓ Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros
- ✓ Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.

La Comisión Nacional para Prevención de Delitos relacionados con Drogas es un organismo técnico y administrativo del Estado, para el estudio de los mecanismos tendientes a la prevención de las actividades ilícitas relacionadas con drogas y para la rehabilitación de estas conductas. La cual se encuentra integrada por un equipo interinstitucional, la Cruz Blanca y el Jefe de la Iglesia Católica, presidida por el o la Procurador General de la Nación.

Coordinación Internacional:

La CNBC asegurará la coordinación de la representación de la República de Panamá en foros internacionales relacionados con las políticas del país contra los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT, es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejoramiento continuo de las políticas nacionales contra ambos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

El Decreto Ejecutivo N° 470 de 20 de julio de 2012, designa al Director (a) de la Unidad de Análisis Financiero como Representante Permanente por la República de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica GAFISUD (actualmente GAFILAT).

Mediante el Acta XXI del Pleno de Representantes de Sudamérica (GAFISUD), de julio de 2010, se resolvió admitir a Panamá como miembro pleno. Actualmente Panamá funge como Vicepresidente del Organismo para el período 2017 y Presidente en el 2018.

La Ley 23 de abril del 2015, establece que la República de Panamá como sujeto de Derecho Internacional participará activamente en los organismos regionales e internacionales contra los delitos de BC/FT/PDAM. La representación ante el grupo EGMONT de Unidades de Inteligencia Financiera, es ejercida por la la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

El Grupo EGMONT es la instancia que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo.

En cuanto a los instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas en materia de prevención y represión del financiamiento del terrorismo, mediante la Ley 23 del 27 de abril del 2015 se implementan las Resoluciones 1267 y 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU a través de un congelamiento preventivo, el cual se encuentra desarrollado en el Decreto 587 del 4 de agosto del 2015.

Desde el año 2015 Panamá forma parte de la Coalición de Países de la Comunidad Internacional contra el Grupo Estado Islámico, en dos comisiones de trabajo, una que busca

bloquear las posibilidades y accesos a la financiación de este grupo terrorista y la segunda comisión, sobre la estabilización, en donde Panamá apoya la parte humanitaria.

En el ámbito regional, la República de Panamá ocupa actualmente la Vicepresidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y asumirá la Presidencia para el período 2017-2018, en el marco del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de este Comité.

Corresponderá a Panamá presentar la Declaración denominada “Fortalecimiento de los Sistemas Financieros Nacionales a través de la Cooperación Internacional y el Intercambio de Información para la Prevención del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, la cual será consensuada por los Estados Partes del CICTE/OEA. La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros participa de la Comisión Especial redactora del borrador de la Declaración de Panamá.

La UAF representa a Panamá ante el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), en el subgrupo de trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismo de Investigación Criminal. Este Grupo de Expertos fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 de la Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y se constituye por lo tanto en uno de los Órganos de Asesores.

Marco Jurídico y Regulatorio en Materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La República de Panamá mediante la promulgación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 instituye el marco jurídico nacional para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Cumpliendo con lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, se procedió a emitir y promulgar su reglamentación, a través del Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015.

El referido Decreto Ejecutivo, tiene como fin desarrollar los lineamientos generales del marco regulatorio con miras a lograr el entendimiento e implementación de las normas que deben aplicar los diferentes organismos de supervisión y todos los sujetos obligados, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; como también el de prevenir los riesgos que se derivan de la posibilidad que los productos y servicios ofrecidos por los sujetos obligados, sean utilizados como vehículos de BC/FT/PADM.

Tradicionalmente el sector financiero panameño ha contado con un marco de supervisión y regulación más robusto en materia prevención de BCFTFDAM. Las entidades de supervisión financiera han desarrollado un marco de regulación y supervisión de prevención acorde con el cumplimiento del marco normativo. En el caso del sector bancario, el principal renglón dentro del sector financiero y con mayor exposición a los mercados internacionales, además de la estructura de supervisión y regulación desarrollada por la Superintendencia de Bancos, la propia operatividad del negocio bancario internacional requiere de relaciones bancarias de corresponsalía y crédito, con los principales bancos internacionales y organismos multilaterales de crédito, los cuales también introducen prácticas y procedimientos que coadyuvan en mitigar el uso indebido de los flujos ilícitos de capitales.

Los organismos de supervisión también han desarrollado en las últimas décadas una capacidad de cooperación no solo a nivel local, sino también entre los diferentes organismos de supervisión regional, lo que ha favorecido el intercambio de información en materia de supervisión de prevención de blanqueo de capitales. En el caso del sector bancario, la Superintendencia de Bancos forma parte de varios organismos de supervisión internacional, como es el caso del Consejo Centroamericano de Superintendentes Bancarios, la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), y el Grupo de Supervisores de Centros Financieros Externos (GIIF). Por otro lado, la Superintendencia del Mercado de Valores ha pertenecido a la Organización Internacional de Reguladores de Valores y actualmente ha logrado completar las condiciones que le permitirán participar nuevamente como miembro activo.

Estas organizaciones promueven no solo la cooperación para la supervisión financiera y de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, sino también la formación y capacitación especializada en estos importantes temas. Para ello existe desde hace varias décadas una red de capacitación y formación de recurso humano especializado sobre la base de la actualización constante y permanente de los mejores estándares internacionales recomendados, tanto por el Comité de Basilea como por los organismos pertinentes de prevención de blanqueo de capitales.

Uno de los objetivos principales de esta estrategia es identificar las prioridades estratégicas para fortalecer los progresos alcanzados en la supervisión de prevención de BCFT, así como también las acciones que se deriven de esta identificación de prioridades estratégicas. Ello permitirá no solo robustecer el marco de supervisión del sector bancario, sino también reducir los impactos adversos reputacionales que afectan a la economía de Panamá, en especial a su sector proveedor de servicios corporativos, igual que al sector bancario. Ésta que es una ventaja competitiva para el desarrollo de negocios bancarios y proveer de fondos para el crecimiento de la economía; no obstante, también representa una vulnerabilidad ante el riesgo de blanqueo de capitales, si no se cuenta con la estructuras e institucionalidad adecuada para mitigar este flagelo

Por ello el objetivo debe ser elevar fortalecer el juicio experto de supervisión bancaria, para que los riesgos reputacionales que puedan tener efectos adversos en la confianza de inversionistas institucionales, no afecten la oferta de servicios financieros. O sea, que estos elementos no constituyan un factor adverso en la valoración de riesgos que los agentes económicos internacionales hacen sobre sus decisiones de inversión en Panamá. Ello es clave si se considera que Panamá es una de las economías de más alto crecimiento económico en la región y también con una estrategia clara y definida para el próximo quinquenio, en aprovechar y maximizar los beneficios de su sector de servicios en especial los relacionados con la logística vinculada a la zona interoceánica, lo que incluye la operación del Canal de Panamá, Puertos, Turismo, transporte multimodal, entre otros

Por ende, el objetivo fundamental es abordar la supervisión de prevención de blanqueo de capitales con un enfoque basado en riesgo, como complemento a la supervisión de cumplimiento del marco regulatorio, en el que ha descansado principalmente el esfuerzo supervisor. Ello implica una evaluación de los productos y servicios que ofrecen y ofrecerán a sus clientes; los canales de comercialización utilizados; así como la ubicación geográfica en el que el sujeto obligado presta, promueve y ofrece sus servicios y productos. El objetivo es que la supervisión sensibilice los hechos que deberán ser controlados y la forma de cómo hacerlo. Para ello se requiere un ambiente de control de conformidad con la complejidad de sus operaciones, estructuras tecnológicas que permitan agregar efectividad a las funciones de prevención, y un análisis predictivo de los riesgos que encara el negocio.

Uno de los pilares del proceso de supervisión de riesgos de prevención será desarrollar un esquema de supervisión extra situ que brinde información constante y actualizada sobre los sujetos obligados financieros. Los desarrollos en esta materia ya se están implementando, así como también se está fortaleciendo toda la infraestructura tecnológica que de soporte a esta nueva metodología y esquema de supervisión.

Otro de los objetivos de esta Estrategia Nacional de Riesgo es poder mantener un marco normativo y de regulación acorde a los mejores estándares internacionales en la lucha y prevención de este importante flagelo. El contar con un marco de regulación actualizado es una de las herramientas básicas para que los sujetos obligados financieros cuenten con un marco adecuado para el desarrollo de sus negocios. Además brinda el entorno adecuado para la supervisión enfocada en la prevención del riesgo de prevención de blanqueo de capitales.

El marco de regulación bancaria sobre prevención de blanqueo de capitales se remonta al año 2000 con las regulaciones referentes a la figura del oficial y el programa de cumplimiento (Acuerdos 8 y 10-2000), así como la regulación referente a la prevención del uso indebido de los servicios bancarios (Acuerdo 9-2000). Dicha regulación se orientaba en sus aspectos fundamentales a la identificación de operaciones sospechosas, incluyendo un catálogo de ejemplos de operaciones sospechosas, las notificaciones a la Unidad de Análisis Financiero, los criterios de identificación de debida diligencia, incluyendo las estructuras fiduciarias, sociedades con acciones nominativas y acciones al portador, siempre con la finalidad de identificar y documentar al verdadero beneficiario real, aun cuando estos fuesen beneficiarios indirectos de cuentas de depósitos bancarios.

Dicha marco de regulación fue actualizado en el año 2005 con la aprobación de los Acuerdos 12 y 12E de 2005 donde se establecían medidas para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, así como una guía de ejemplos de operaciones sospechosas, respectivamente. Dicha regulación actualizaba, entre otros, criterios sobre debida diligencia; concepto de cliente; los recursos de éstos que serán objeto de la relación contractual, con independencia de los montos de operación, así como la obligación de mantener dicha información actualizada durante su curso; establecimiento de criterios mínimos de elaboración de perfil del cliente; uso de herramientas tecnológicas para detectar patrones de actividad anómalos o sospechosos; especial atención a los clientes identificados como personas políticamente expuestas (PEP); declaraciones de efectivo; el requerimiento de manuales sobre política de conocimiento del cliente para bancos y empresas fiduciarias, así como también políticas de conocimiento del empleado, como principales temas regulatorios.

El Acuerdo 12E-2005 brindaba un catálogo o guía de ejemplos sobre operaciones sospechosas sobre depósitos y retiros; cuentas bancarias; transferencias de fondos; características del cliente; operaciones vinculadas a países, territorios o jurisdicciones preocupantes; operaciones con características poco usuales; clientes que evitan cumplir con requisitos de información; cambios en patrones de transacciones; transacciones relacionadas con financiamiento del terrorismo; transacciones relacionadas con el arbitraje cambiario y cajeros automáticos (ATM).

La Superintendencia de Bancos ha actualizado su marco de regulación bancaria acorde los conceptos y principios del nuevo marco legal de prevención de blanqueo de capitales. Este nuevo marco además de los sujetos obligados financieros de bancos y empresas fiduciarias, dio facultades adicionales de supervisión de prevención de blanqueo de capitales a las empresas financieras, empresas de leasing o arrendamiento financiero, empresas de

factoraje, emisores o procesadoras de tarjetas de débito, crédito y pre-pagadas, entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico y otros servicios corporativos realizados por empresas fiduciarias.

Para tal efecto, la SBP ha aprobado las siguientes regulaciones que le son aplicables a sus sujetos regulados:

- a) Acuerdo 5-2015: Prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. El acuerdo desarrolla los conceptos de clientes; debida diligencia del cliente, identificando y verificando hasta el último beneficiario final persona natural; los requisitos mínimos de debida diligencia; perfil de cliente para personas naturales; perfil de cliente para personas jurídicas; documentación y seguimiento; PEP; debida diligencia para clientes de alto riesgo; declaración de transacciones en efectivo; manuales sobre política conocimiento del cliente; política conozca su empleado; obligación capacitación empleados; operaciones sospechosas; función de cumplimiento; régimen sancionatorio; notificaciones a la Unidad de Análisis Financiero, entre los temas principales.
- b) Acuerdo 7-2015: Catálogo de Señales de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con BCFTFDAM: ejemplos de alertas relacionadas con el comportamiento de clientes; alertas relacionadas con el comportamiento de los empleados directivos; alertas relacionadas con transacciones en efectivo, transferencias electrónicas y giros de dinero; alertas relacionadas con entidades bancarias, empresas fiduciarias y otras entidades financieras; cambios en patrones de realizar algunas transacciones; transacciones relacionadas con el FT; transacciones relacionadas con el arbitraje cambiario y cajeros automáticos; entre otros.
- c) Acuerdo 9-2015: procedimiento sancionatorio administrativo en materia de prevención.
- d) Acuerdo 10-2015: Prevención del uso indebido de servicios bancarios y fiduciarios: desarrollando temas como: Manuales para la prevención de blanqueo de capitales; conformación del comité de prevención de blanqueo de capitales en entidades bancarias (gobierno corporativo); concepto de cliente; beneficiario final; operaciones interbancarias; debida diligencia en operaciones interbancarias; debida diligencia del cliente; requisitos mínimos de debida diligencia; método de clasificación de riesgo de los clientes; categorías de riesgo de clientes; criterios mínimos para el análisis y perfil de riesgo del cliente; perfil de cliente de personas naturales; perfil de cliente de personas jurídicas; identificación de beneficiario final en sociedades anónimas; debida diligencia simplificada; debida diligencia en transferencias electrónicas; evaluación del riesgo en banco y empresas fiduciarias; herramienta de monitoreo para las entidades bancarias; PEP; debida diligencia para clientes de alto riesgo; declaración de transacciones en efectivo; política conozca su

empleado; obligación de capacitación de empleados; operaciones inusuales; operaciones sospechosas; notificación a la UAF; suministro información; responsabilidad corporativa; grupos bancarios; sanciones; entre otros temas.

- e) Acuerdo 6-2016: lineamientos para la gestión de riesgos en materia de prevención de BCFTFDAM que pudieran surgir con respecto a nuevos productos y nuevas tecnologías: en la que se establecen lineamientos para: factores de riesgo de BCFTFDAM asociados a clientes, productos o servicios, canales de distribución y medios de pago, zona geográfica; evaluación de riesgo de nuevos productos y nuevas tecnologías; incursión en zonas geográficas; informe de evaluación de riesgo de nuevos productos y nuevas tecnologías.
- f) Acuerdo 7-2016: lineamientos para la prevención de BCFTFDAM en las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza ofrecidas por bancos corresponsales de la plaza bancaria panameña: regulaciones sobre: relaciones de corresponsalía; debida diligencia a bancos representados; régimen reforzado de debida diligencia en relaciones de corresponsalía; relaciones de corresponsalía con bancos pantalla.
- g) Acuerdo 1-2017: Modificaciones al acuerdo 10-2015. Actualizaciones en materia de manuales de política de prevención; comité de prevención de BC; requisitos mínimos de debida diligencia; método de clasificación de riesgo de clientes; perfil de clientes de personas naturales; perfil de clientes de personas jurídicas; identificación de beneficiario final de sociedades anónimas; auditoría interna; grupos bancarios; sucursales y subsidiarias en el extranjero; política conozca su empleado; debida diligencia para clientes de alto riesgo; congelamiento preventivo; herramienta de monitoreo; evaluación de riesgo de banco y empresa fiduciaria; debida diligencia simplificada.
- h) Actualmente la SBP también trabaja en la actualización de regulaciones sobre transferencias bancarias.

El nuevo marco regulatorio ha significado nuevos desafíos institucionales en adaptar al resto del sector financiero a los estándares de regulación y supervisión de prevención, así como también desde un punto de vista institucional nuevos retos en materia de recursos humanos, capacitación y estructura institucional para la supervisión de prevención.

Esto se ha abordado con rapidez y eficacia en crear una estructura institucional nueva, con más recursos humanos para la supervisión. De igual forma, adaptar a los nuevos sujetos obligados financieros en materia de prevención a la dinámica, estructura y ambiente de control que se sigue en el sector bancario.

Este esfuerzo requirió además de la dotación de mayor recurso humano de capacitación y fortalecimiento profesional. Para ello se ha contado con recursos de asistencia técnica de Organismos Multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional, así como también de asistencia técnica del Departamento del

Tesoro del Gobierno de Estados Unidos. Otras fuentes de asistencia técnica se relacionan con el Toronto Center para la supervisión de prevención en empresas fiduciarias, asistencia técnica y colaboración de ASBA, así como también de la Oficina de Naciones Unidas para la prevención del BCFT.

La estrategia es seguir fortaleciendo las capacidades del recurso humano utilizado en la supervisión de prevención. Paralelo a ello, actualmente se desarrolla una consultoría para mejorar y robustecer los procedimientos de supervisión con enfoque basado en riesgo. Esta iniciativa se sigue no solo en la Superintendencia de Bancos de Panamá, sino también en los otros organismos de supervisión financiera como la Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOOP). El concepto es contar con un esquema de supervisión homologado para la prevención de BCFT en todo el sector financiero y que sea aplicable a los conglomerados financieros que operen de forma simultánea en dos o más mercados.

El Plan Estratégico del Consejo de Coordinación Financiera (CCF), ente que agrupa a los supervisores financieros, contempla entre sus pilares estratégicos el establecimiento de un comité de enlace para temas de supervisión de prevención de BC/FT/FDAM. Dicho comité ya en funciones coordina los esfuerzos institucionales necesarios para el desarrollo de esta nueva metodología de supervisión de riesgo, complementaria a la supervisión de cumplimiento legal. Ello valida los esfuerzos en cooperación interinstitucional para la supervisión y regulación en materia de prevención de BCFT.

La Superintendencia del Mercado de Valores fue creada mediante Ley 67 de 1 de septiembre de 2012 (publicada en Gaceta Oficial 26863-A de 2 de septiembre de 2011), como organismo autónomo del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, presupuestaria y financiera.

Tuvo su génesis en la antigua Comisión Nacional de Valores (creada mediante Decreto de Gabinete 247 de 16 de julio de 1970), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, cuya función primordial era regular, analizar y fiscalizar la venta de títulos valores al público inversionista.

Posteriormente a través del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 se institucionaliza la Comisión Nacional de Valores a cargo de tres Comisionados.

El objetivo general de la Superintendencia es regular, supervisar y fiscalizar las actividades del mercado de valores que se desarrollen en la República de Panamá o desde ella, propiciando la seguridad jurídica de todos los participantes del mercado y garantizando la transparencia, con especial protección de los derechos de los inversionistas.

Actualmente tiene competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del mercado de valores.

La Superintendencia ha supervisado a sus entidades reguladas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo desde la entrada en vigencia de la Ley 42 de 2000, y ha velado por el cumplimiento de las convenciones internacionales que nuestro país ha ratificado.

Con la entrada en vigencia de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 ha adecuado su reglamentación, con el fin de exigir a los sujetos obligados del sector la implementación de altos estándares en materia de prevención de BC/FT recomendados tanto por organismos internacionales así como también las mejoras prácticas exigidas por sus homólogos internacionales.

Durante la existencia de la institución, se ha enfatizado en la supervisión del conocimiento de los clientes en las entidades reguladas, en aras de prevenir la introducción de dinero ilegal a nuestro sistema financiero, y cuenta con un Manual de Supervisión en materia de prevención del BC/FT con la metodología del Enfoque basado en Riesgo.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, es una Entidad creada para regular y fiscalizar el mercado de seguros en la República de Panamá, que inició como una Dirección dentro del Ministerio de Comercio e Industrias de la República desde 1956.

Posteriormente, a través de la Ley 12 del 3 de abril de 2012, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá se convirtió en una Entidad Autónoma del Estado, encargada de la fiscalización, supervisión, reglamentación y vigilancia de las empresas o entidades que tengan por objeto realizar operaciones de seguros, intermediarios de seguros; aseguradoras cautivas (Ley 60 de 1996) y compañías e intermediarios de reaseguros (Ley 63 de 1996).

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, tal como lo exige la Ley 23 de 27 de abril de 2015, viene actualizando su normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (Acuerdo 3-2015), a fin de establecer los criterios que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros, para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del BC/FT/PADM dentro de la industria.

Del mismo modo, la SSRP viene adoptando un enfoque basado en riesgo en materia de BC/FT/PADM, así como un proceso administrativo sancionador, que busca la aplicación de sanciones disuasivas, a los sujetos obligados que no cumplan con la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales.

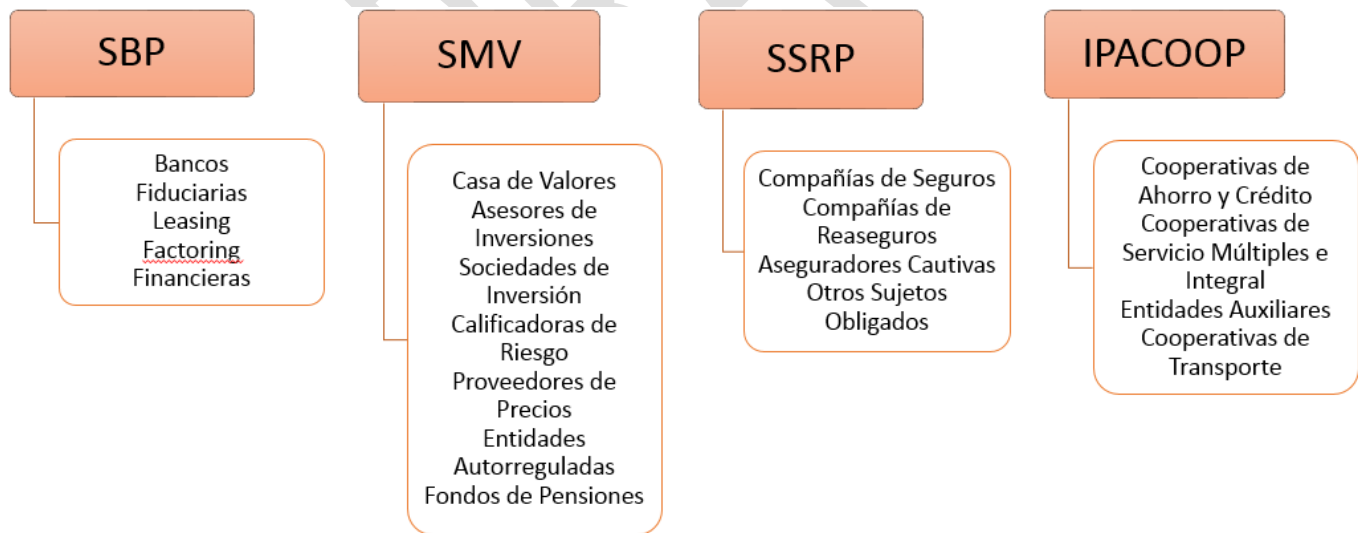
Es importante destacar que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, ha emitido nueva normativa para el sector de seguros, en materia de Gobierno Corporativo (Acuerdo 2-2016), que establece que todas las empresas de seguros y reaseguros deben constituir a nivel de Junta Directiva, un comité de riesgo y cumplimiento, que tiene dentro de sus funciones vigilar que se cumplan con las políticas y procedimientos establecidos en materia de prevención de BC/FT/PADM.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo se creó mediante la Ley 24 de 21 de julio de 1980 y es a través de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997, donde se establece que tendrá la competencia privativa sobre las actividades que realicen las cooperativas, dándoles autorizaciones o sanciones correspondientes.

En virtud de la promulgación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, el IPACOOOP actualiza y emite nuevas normativas en materia de operaciones sospechosas, supervisión basada en riesgo, debida diligencia, identificación del beneficiario final, entre otras. A razón de las nuevas normativas se emitió, por primera vez, un proceso administrativo sancionatorio específico para el sector de cooperativas.

Igualmente el IPACOOOP, cuenta con un Manual De Supervisión Para La Prevención Del Blanqueo De Capitales Y Contra El Financiamiento Del Terrorismo Con Un Enfoque De Gestión De Riesgo, el cual fue aprobado mediante Resolución DE-120-2016.

Es importante destacar que el IPACOOOP cuenta con el Manual de Supervisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales y contra el Financiamiento del Terrorismo con un Enfoque de Gestión de Riesgo, el cual fue aprobado mediante Resolución DE-120-2016. No obstante, destacamos que antes de la aprobación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, IPACOOOP en el 2014 cambió su metodología de supervisión que era la de cumplimiento por una supervisión de prevención del blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo con enfoque basado en riesgo.



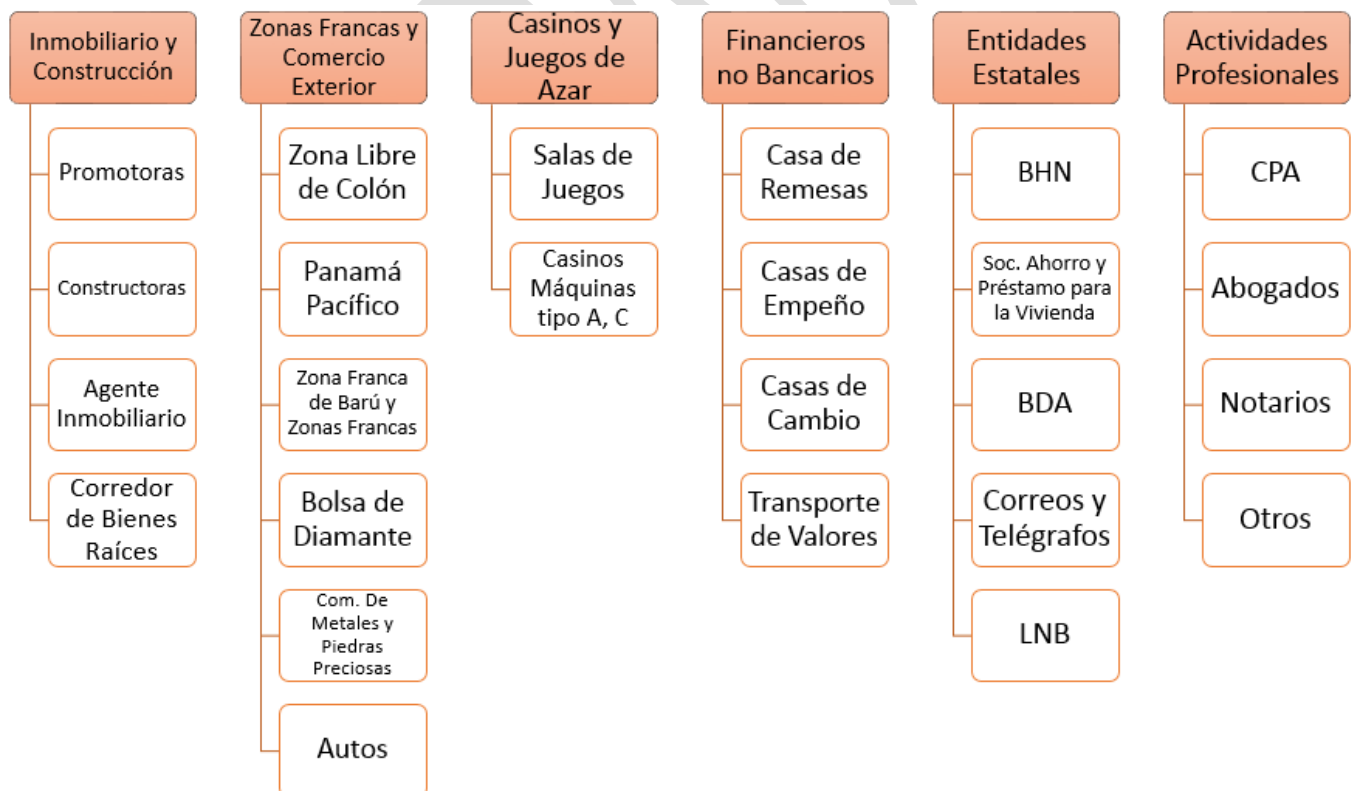
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas fue creada mediante la Ley 23 de 27 de abril de 2015, y tiene a su cargo, en la vía administrativa, la supervisión y regulación de los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, referente a la

prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 361 de 12 de agosto de 2015, se organiza la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. Es importante resaltar que uno de los aspectos innovadores de la Ley 23 de 2015 es la inclusión de actividades y profesiones no financieras designadas, como sujetos obligados en materia de BC/FT/PDAM.

Se han emitido dieciocho (18) resoluciones de la Junta Directiva de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros que reglamentan a los sujetos obligados no financieros y a las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión y su respectivo procedimiento sancionatorio, veintiún (21) Comunicados dirigidos a los Sujetos Obligados No Financieros y a los profesionales que realizan las actividades profesionales sujetas a supervisión.

En materia de coordinación nacional ha suscrito cinco (5) Acuerdos de Cooperación Interinstitucional: con la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo; Dirección General de Ingresos, Administración de la Zona Libre de Colón, Junta de Control de Juegos y el Ministerio de Comercio e Industrias.



Mediante el Decreto Ejecutivo 136 del 9 de junio de 1995, se crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para la Prevención del Delito de Lavado de Dinero Producto del

Narcotráfico, adscrita al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. Posteriormente, dicho decreto fue reformado por el Decreto Ejecutivo 163 de octubre del 2000 creando la Unidad de Análisis Financiero, para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la cual pasará a través del Decreto Ejecutivo 78 de 2003 a ser la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Luego, a través del Decreto Ejecutivo 930 del 27 de noviembre de 2009, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, pasó a ser una entidad de carácter administrativo, con autonomía presupuestaria, que forma parte del Ministerio de la Presidencia.

Con la finalidad de ampliar el margen de cumplimiento de los estándares internacionales, se reorganiza mediante el Decreto Ejecutivo N° 947 del 5 de diciembre del 2014, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, a fin de adecuar su funcionamiento, decretándola como una entidad de seguridad del Estado, de carácter administrativo, con autonomía funcional y presupuestaria adscrita al Ministerio de la presidencia.

Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No. 241, del 31 de marzo del 2015, se le asigna el nombre de Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y se le establecen mayores funciones.

A través de la Ley 23 del 2015, la UAF se fortalece jurídicamente, ya que se establece su independencia operacional. Además, es normado como centro nacional para la recopilación y análisis de la información financiera relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país. Su campo de facultades es ampliado, sobre todo en materia de Cooperación Internacional facultándolo para intercambiar información de inteligencia financiera con entidades homólogos previa firma de memorando de entendimiento u otros acuerdos de cooperación, con jurisdicciones con las que no se haya suscrito acuerdo alguno, siempre que sean del Grupo Egmont y por reciprocidad. Además, facilitar cooperación cuando la información sea relevante al cumplimiento de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Mediante decreto Ejecutivo No. 587 de 4 de agosto de 2015, se reglamentó el Congelamiento Preventivo desarrollado en el Título VI de la ley 23 del 27 de abril del 2015, estableciendo los procedimientos para la identificación y aplicación de medidas para el congelamiento preventivo de fondos o activos, conforme a los procedimientos establecidos en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267, 1988, 1373, 1718, 1737, 2161, 2170, 2178, 2199 y sucesoras; mediante el cual, obliga a todos los sujetos obligados, a realizar la retención y prohibición inmediata, de la libre disposición de los fondos y activos, incluyendo la prohibición de transferencias, conversión, disposición o movimientos de estos que pertenecen o son controlados por personas o entidades

designadas bajo los criterios de las resoluciones antes mencionadas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A fin de cumplir con el referido Decreto 587, la UAF desarrolló un manual, un formulario, un instructivo y un flujograma de congelamiento preventivo, todos con el objeto de establecer directrices a los sujetos obligados que les ayude de forma clara y sistemática a cumplir con sus obligaciones al recibir por parte de la UAF los listados emitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a las resoluciones antes mencionadas.

Por otra parte, mediante Decreto Ejecutivo No. 324 de 19 de julio de 2016, se crea el Departamento contra el Terrorismo y el Comité de Prevención contra el Terrorismo y su financiamiento en la secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional, como entidad encargada de ejecutar el procedimiento de enlistamiento, bajo los criterios de la Resolución 1373 y sucesoras del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La República de Panamá es signataria de la Convención de Palermo y la Convención de Viena, ha tipificado el delito de Blanqueo de Capitales en los artículos 254 a 259 del Código Penal. La más reciente modificación del artículo 254 del Código Penal incluyó una gama de actividades ilícitas precedentes haciendo un total de treinta y siete 37.

El delito de Blanqueo de Capitales tiene todos los verbos rectores definidos en las Convenciones de Naciones Unidas y es también un delito autónomo.

La pena por blanqueo de capitales es de 5 a 12 años en prisión y las personas jurídicas que estén involucradas pueden ser sujetas a multas o incluso a la cancelación de la licencia o del registro de operación, por ser usada o creadas para cometer delitos aunque no se benefician.

Panamá cuenta con una normativa penal para procesar y aplicar sanciones penales a personas naturales como jurídicas, que financien el terrorismo, ya que dentro de su normativa ha tipificado el delito de Financiamiento al Terrorismo en base a lo establecido en la Convención contra el Financiamiento de Terrorismo (Código Penal. Artículos 293 y 294), extendiéndose estas sanciones a las personas que deliberadamente y por cualquier medio, directo o indirecto, con la intención de usarlos ilegalmente, o a sabiendas que van a ser usados, total o parcialmente, para realizar actos terroristas; o por una organización terrorista o por un terrorista, aun cuando no haya una relación directa con el acto terrorista. Incluso para cualquier otro acto, como sería la preparación o el entrenamiento para cometer actos terroristas.

Panamá ratificó en julio del 2012 el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, propuesto por la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de ONU y adopto en junio del 2002 la Convención Interamericana contra el Terrorismo, entrando en vigencia en julio del 2004.

Conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobó la Evaluación Nacional de Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá, en diciembre de 2016.

El delito de lavado de activos es un delito complejo, que requiere de un delito precedente que genere un ilícito que debe ser integrado en la economía a fin de darle apariencia lícita.

En el lavado de activos se pueden identificar tres fases en las cuales puede ser lavado el dinero ilícito, siendo estas la fase de colocación que consisten en introducir el dinero a la economía, utilizando cualquier sector o método; la estratificación es aquella donde el dinero se divide en partes más pequeñas y con eso se realizan diversas transacciones; y por último la integración la cual consiste en que el dinero una vez ya colocado en la economía, se busca moverlo y reutilizarlo para lograr así mezclarlo y dificultar su rastreo.



Colocación

Estratificación

Integración

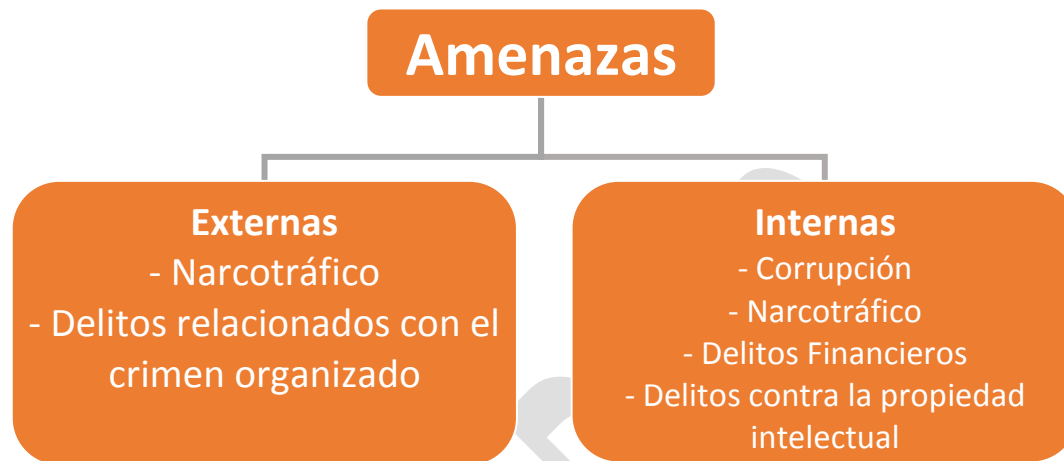
A continuación, se presentan las principales conclusiones que arrojó la referida Evaluación Nacional y que sirvieron de base para el desarrollo del plan de acción de la presente Estrategia Nacional.

Amenazas y vulnerabilidades de blanqueo de capitales en Panamá

En Panamá no hay una presencia notable de carteles de la droga, o estructuras de crimen organizado. Aunque existen algunas pandillas, estas tienen una caracterización local y no transnacional como lo serían las Maras. Panamá no es un país productor de cocaína, aunque una de sus grandes amenazas es el tránsito de este estupefaciente por el territorio panameño.

Considerando el papel de tránsito y de centro financiero, y el menor impacto de crimen organizado, su principal amenaza de blanqueo de capitales es externa, como producto de los delitos que se cometen en el exterior y que se busca al país para las diferentes etapas del

blanqueo, en especial la integración, puesto que las etapas de colocación y estratificación ocurren principalmente en el exterior.



Los principales fenómenos delictivos que presentan una amenaza para Panamá, son el crimen organizado transnacional que ofrece un portafolio de servicios donde Panamá es un país de tránsito o flujo de varios de esas actividades, como lo serían el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, etc.

Las principales amenazas internas para el blanqueo de capitales, son el narcotráfico, la corrupción, los delitos financieros, y delitos contra la propiedad intelectual como lo sería la falsificación de marcas, y el contrabando. No obstante la amenaza principal es de origen externo. Los delitos son cometidos en el exterior y luego se utiliza a Panamá como tránsito del dinero o incluso para blanquearlo.

Considerando las rutas delictivas los principales delitos que generan recursos que pueden ser blanqueados en Panamá, son:

1. El Narcotráfico por la ruta de la droga que se genera en los países andinos y sube por Panamá para el tráfico hacia el Norte de América, o en menor medida Europa.
2. Otros delitos relacionados con el crimen organizado, que utilizan las mismas rutas del narcotráfico, por ejemplo para el tráfico de migrantes que también usa la ruta hacia el norte de América y la ruta de las armas del norte de América hacia Sudamérica.
3. El contrabando y los delitos contra la propiedad intelectual, donde viene mercancía de contrabando o falsificada de países como China y Perú para luego ser reexportada o que continúe su ruta tanto hacia norte América como Sudamérica.

Sectores más vulnerables

Considerando la amenaza de blanqueo de capitales que es principalmente externa, los sectores más susceptibles para ser utilizados para el blanqueo de capitales son aquellos con grandes relaciones con el exterior que canalizan dinero, inversiones y bienes del exterior.

Es importante anotar que actualmente, con la Ley 23 de 2015 todos los sectores tienen una normativa bastante estructurada en materia de prevención de blanqueo de capitales. Adicionalmente, con la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, bajo la misma Ley se tiene supervisión en los sectores vulnerables no financieros.

No obstante, las principales vulnerabilidades que se pueden identificar se encuentran en los nuevos sectores incluidos en la Ley 23 de 2015, pues son sectores que están en proceso de implementación de las medidas preventivas contempladas en la misma.

Sector No Financiero:

Riesgo	Sectores
Alto	Zona Libre y Francas, Inmobiliarias y de Construcción, y Abogados.
Medio Alto	Remesadoras, los casinos y los juegos de suerte y azar.
Medio	Contadores, las empresas dedicadas a la compra de autos nuevos y usados, las casas de cambio y casas de empeño, los comercializadores de metales y piedras preciosas.
Bajo	Notarios, Banco hipotecario Nacional, el Banco De Desarrollo Agropecuario, las empresas de transporte de valores, la Lotería Nacional de Beneficencia, Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá

Los sectores más vulnerables para el blanqueo de capitales en Panamá serían los sectores relacionados con el comercio exterior, como lo son las zonas francas, en particular la Zona Libre de Colón por su liderazgo en el sector. Otro sector vulnerable es el sector inmobiliario y de construcción por recibir grandes inversiones del extranjero que pueden ser vulneradas para el blanqueo y el uso del efectivo principalmente en pagos a proveedores.

Estos sectores son los más vulnerables tomando en consideración que la materialidad del delito es mayor por su gran influencia en la economía del país.

Otro sector vulnerable es el de los abogados que desarrollan las actividades sujetas a supervisión definidas en la Ley 23 de 2015. Este sector es vulnerable puesto que está en un proceso de implementación de las medidas preventivas y de las supervisiones. No obstante, estas vulnerabilidades del sector no tienen un papel preponderante en la economía nacional, por lo que su materialidad e impacto de blanqueo de capitales es menor que los sectores antes señalados.

De nivel medio alto se encuentran las remesadoras, los casinos y los juegos de suerte y azar. De nivel medio de riesgo están los contadores, las empresas dedicadas a la compra y venta de autos, las casas de cambio y casas de empeño, los comercializadores de metales y piedras preciosas.

Otros sectores de bajo impacto son notarios, los bancos de fomento del sector vivienda y agro, que son el Banco Hipotecario Nacional, el Banco De Desarrollo Agropecuario que están bajo supervisión de la Intendencia. Así mismo, están las Empresas de Transporte de Valores, la Lotería Nacional de Beneficencia, Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá. Estos sectores no tienen una gran representatividad en la economía panameña.

Entre las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes en su informe de noviembre 2016, recomienda independizar y convertir en un regulador independiente a la Intendencia de Supervisión de Regulación de Sujetos No Financieros.

Sector Financiero

El siguiente sector vulnerable sería el sector bancario por su mayor exposición al riesgo por sus relaciones internacionales, algo que contrasta con los sectores de valores, seguros y cooperativas que tienen una menor influencia internacional. Su vulnerabilidad es también menor puesto que es el sector con las medidas preventivas de mayor trayectoria, incluso en la imposición de sanciones.

El mercado de valores según el diagnóstico de la Evaluación Nacional de Riesgo es una actividad que se ha distinguido por la implementación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales. Adicionalmente cuenta con medidas de transparencia, debido a que las empresas que cotizan en bolsa deben mantener pública su información. El mercado de valores en Panamá se caracteriza más por la venta de bonos con respecto al segmento a mediano y largo plazo, lo que hace su posible vulnerabilidad para ser utilizado para el blanqueo de capitales es más limitado, pues no es un mercado con un dinamismo al nivel del mercado accionario que en un mismo día puede pasar por distintos dueños haciendo más fácil del rastro del dinero.

Entre una de las recomendaciones el Comité de Expertos Independientes, incorporar a la Superintendencia del Mercado de Valores a la Comisión Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

Según la Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá, las cooperativas tienen un menor riesgo de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, por el hecho de que las mismas no realizan transacciones internacionales.

Personas Jurídicas

Panamá, por ser una economía integrada al sistema internacional presenta unas particularidades especiales. Las estructuras jurídicas, como las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado pueden ser creadas en Panamá, pero pueden ser mal utilizadas en el exterior para el blanqueo de capitales o la financiación al terrorismo. Esto mismo puede ocurrir con fideicomisos creados y administrados en Panamá. Adicionalmente, las firmas de abogados corporativos pueden ofrecer servicios tanto para Panamá como en el exterior. Todo lo anterior puede ser utilizado para vulnerar otras economías o generar delitos en otros países.

Aunque Panamá sea utilizada para la creación de sociedades anónimas, una gran parte de estas sociedades no realizan su actividad en la República de Panamá, por lo que el sistema financiero o comercial panameño no es utilizado para blanquear el dinero. Por tanto, la vulnerabilidad aquí presentada es un elemento que puede ser utilizado para vulnerar otras jurisdicciones que ofrecen otro tipo de servicios, mas no es una vulnerabilidad indicativa directa que en la República de Panamá se blanqueen capitales o se financie el terrorismo.

Financiación del terrorismo y de la proliferación

En cuanto a la financiación del terrorismo, en Panamá no existe una amenaza de terrorismo clara. No hay presencia de grupos terroristas, no se ha identificado posibles terroristas individuales radicalizados en alguna causa y tampoco se ha identificado un posible lugar de capacitación o radicalización. Por tanto, no existe amenaza interna. La amenaza es definitivamente externa.

Aunque esta es una baja amenaza para Panamá, el país por ser un centro financiero pudiese ser vulnerado para la financiación del terrorismo. No obstante, las principales relaciones comerciales y financieras de Panamá no evidencian un riesgo mayor de financiación del terrorismo, puesto que Panamá tiene relaciones principales con los países latinoamericanos y Estados Unidos. Por tanto, la amenaza es baja y en caso de existir sería externa.

En cuanto a los posibles sectores que pueden ser vulnerados para el financiamiento del terrorismo, como lo son por ejemplo las remesas, en Panamá la mayor cantidad de remesas va hacia Colombia, Nicaragua, China y República Dominicana, lo que coincide con una gran cantidad de trabajadores que han migrado de dichos países a Panamá por sus beneficios laborales, y envían estas remesas a sus familias, lo que significa un riesgo bajo de que se consolide una financiación al terrorismo.

Los demás sectores que están iniciando la implementación de las medidas preventivas, tienen menores riesgos por no tener una relación tan estrecha de envío de recursos hacia zonas de alto riesgo de terrorismo.

Lo descrito en el párrafo anterior ocurre también para el caso de los sectores financieros, puesto que sus relaciones con regiones de alto riesgo de terrorismo son limitadas. Al igual que en el caso del blanqueo de capitales el sector que podría tener una mayor exposición, sin que ésta sea alta para financiación del terrorismo, es el sector bancario por sus relaciones internacionales.

Las zonas francas pueden tener una exposición mayor al riesgo de FT, sin que este sea alto, por sus relaciones con el comercio internacional.

Las organizaciones sin fines de lucro, tampoco tienen un alto nivel de relación con el exterior, se caracterizan más por su relación de ingresos y beneficiarios locales. Incluso aquellas que sí tienen una relación con el exterior, ésta tampoco es con regiones de alta amenaza terrorista. Las relaciones que las organizaciones sin fines de lucro de Panamá tienen con el exterior se caracterizan por ser receptoras de dinero para implementación de actividades locales, lo que reduce las vulnerabilidades de este sector para dirigir recursos a zonas de influencia terrorista.

Finalmente, el riesgo de financiación del terrorismo es bajo, no solo por tener una amenaza baja, sino porque las relaciones del país tanto comerciales como financieras con zonas de alto riesgo de terrorismo son limitadas, lo que hace que las vulnerabilidades y el impacto sea bajo.

Considerando que la amenaza de la financiación al terrorismo es baja y que las vulnerabilidades de los sectores también lo es, el riesgo general de este elemento es en definitiva bajo para Panamá.

Pilares de la Estrategia Nacional para la lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Metodología

El proceso de la elaboración de la presente Estrategia Nacional para la lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se llevó a cabo bajo la coordinación de la CNBC, teniendo como fundamento la Evaluación Nacional de Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá.

Se estableció una mesa de trabajo técnica interinstitucional, compuesta principalmente por autoridades de prevención, detección e inteligencia y de justicia penal. Su labor se centró en realizar reuniones periódicas dirigidas por el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la asesoría y asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, para determinar el plan de acción mediante la creación de los pilares estratégicos transversales, institucionales, de prevención, detección y justicia penal, junto con sus respectivos objetivos.

Cada institución que conformó la mesa técnica, fijó sus acciones, responsabilidades y los plazos para el cumplimiento de los pilares estratégicos aprobados.

MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL
Autoridad Nacional de Aduanas.
Dirección de Investigación Judicial (DIJ) / División de Blanqueo de Capitales
Consejo Nacional de Seguridad
Instituto Panameño Cooperativo Autónomo
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
Ministerio de Comercio e Industrias.
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Gobierno y Justicia.
Órgano Judicial
Procuraduría General de la Nación/ Unidad de Blanqueo
Servicio Nacional de Fronteras
Superintendencia de Bancos.
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
Superintendencia del Mercado de Valores.
Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Zona Libre de Colon

Prioridades Estratégicas

A. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES: Son aquellas oportunidades de mejoras que requieren las instituciones a fin de fortalecer sus procesos y actuaciones en cuanto al sistema de prevención y represión de BC/FT/PADM.

1.	Dotar a todo organismo con competencias y responsabilidades sobre la implementación del régimen de prevención y represión de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de la proliferación, con los recursos financieros necesarios para la:
	(A) Contratación de personal, (B) Adquisición de sistemas y aplicativos de informática, y (C) Capacitación en programas de prevención y detección orientados a desarrollar la capacidad y destreza del personal (de regulación, supervisión, inteligencia financiera, investigación, y justicia penal) de todos los organismos con competencias en PBC/FT.
2.	Transformación del Proceso de Supervisión para los Organismo de Supervisión Financieros, un enfoque basado en riesgos para la Prevención de BC/FT/PADM
3.	Mejorar el sistema actual de la Aduanas denominado: Sistema Integrado de Gestión Aduanera.
4.	Controlar y prevenir el dinero transfronterizos.
5.	Medición de la efectividad de las gestiones y actuaciones de los Organismos de Supervisión en materia de BC/FTP/PDAM.

B. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: Son aquellas que tiene como objetivo general la coordinación entre instituciones involucradas en la prevención, detección y represión de BC/FT/PDAM.

1.	Establecer y/o fortalecer la coordinación inter-institucional (MICI-MEF, UAF-ANA y MICI-SBP) con el objetivo de fortalecer la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra PBC/FT/PADM
2.	Establecer un grupo técnico multidisciplinario para apoyar al Comité Nacional PBC/FT/PADM en la toma de decisiones, desarrollo de políticas y coordinación de actividades relacionadas a la prevención, detección y represión penal de actividades ilícitas y la implementación efectiva de la estrategia nacional en materia de PBC/FT/PADM.
3.	Independencia y autonomía de la Intendencia de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs).
4.	Adecuar el marco jurídico que designa y regula los APNFD para ajustarlo en línea con los estándares internacionales.
5.	Habilitar infraestructuras de la Autoridad Nacional de Aduanas.

6.	Fortalecer el marco regulatorio aduanero.
7.	Formalizar acuerdos de cooperación inter-institucional entre las autoridades judiciales que tengan información relevante para la identificación de bienes ilícitos en el marco de una investigación penal.
8.	Fortalecer la cooperación Interinstitucional del Departamento de Contraterrorismo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional y del Comité de Prevención del Terrorismo y su Financiamiento (CPTF).
9.	Estudiar y analizar el alcance de la normativa vigente en materia fiscal en cuanto a la cooperación internacional

C. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (PRELIMINARES) COMPONENTE DE PREVENCIÓN: Son aquellos que tienen por objetivo fortalecer los controles en cuanto a licencias, supervisiones basadas en riesgo, integridad y el uso de estructuras para proteger el sistema financiero.

1.	Fortalecer la infraestructura del régimen financiero-preventivo creando un procedimiento administrativo especial para la concesión de licencias de los operadores en divisas, casas de remesas y los operadores de pagos por medios electrónicos.
2.	Fortalecer el procedimiento de supervisión basada en riesgo de prevención de BCFT para los operadores financieros de negocios externos ya sean bancarios, bursátiles o de seguros, a través de metodologías más robustas de supervisión que permitan identificación de riesgos y vulnerabilidades externas, así como las acciones correctivas en dichos negocios externos para mitigar los riesgos.
3.	Continuar con el desarrollo de acciones especiales que favorezcan la integridad y reputación de la economía del país.
4.	Fortalecer el marco regulatorio y operativo de los entes competentes en supervisión en materia de PBC/FT/PADM, para cada sector (banca, valores, seguros, cooperativas, y APNFDs) para establecer un régimen de supervisión basada en riesgos.
5.	Desarrollar y/o fortalecer los mecanismos formales de coordinación, cooperación e intercambio de información requerida entre la UAF y los supervisores (banca, seguros, valores, cooperativas, y APNFDs).
6.	Establecer y/o fortalecer las medidas preventivas para impedir y controlar actividades de BC/FT en:
	(A) El uso de personas y estructuras jurídicas; (B) El uso de fundaciones y fideicomisos; y (C) El uso de organizaciones sin fines de lucro.
7.	Fortalecimiento en el uso de medio de pagos electrónicos en la Zona Libre de Colón.

D. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (PRELIMINARES) COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA PENAL: Son aquellos que tienen como objetivo fortalecer las prácticas y uso de técnicas de investigación patrimonial y financiera, así como el uso de esta información en el marco de una investigación penal.

1.	Revisar la compatibilidad de la legislación penal sobre FTP con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la materia de terrorismo y la proliferación.
2.	Fortalecer las prácticas de investigación patrimonial y financieras en el marco de una causa penal.
3.	Fortalecer institucionalmente a la Unidad de Blanqueo de Capitales y la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado II.
4.	Fortalecer el uso de técnicas especiales de investigación en el marco de una investigación penal sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación.
5.	Mejorar la utilización de la información financiera producida por la UAF en las investigaciones de blanqueo de capitales.
6.	Fortalecer el sistema de cooperación y ayuda judicial en el marco de las investigaciones penales de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

E. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS COMPONENTE DE DETECCIÓN E INTELIGENCIA: Son aquellos que tienen como objetivo fortalecer la detección del movimiento de dinero en efectivo e instrumentos negociables, la recolección y análisis de la información financiera, como también la cooperación entre unidades de análisis financieros.

1.	Fortalecer el sistema de recolección, análisis y diseminación de la información financiera.
2.	Fortalecer las medidas y procedimientos existentes para mejorar la calidad del análisis e información de los ROS remitidos a la UAF.
3.	Fortalecer dentro de la UAF la elaboración de análisis estratégicos.
4.	Lograr la plena digitalización de ROS remitidos a la UAF en forma no electrónica.
5.	Fortalecer la cooperación internacional entre entidades homólogas a la UAF
6.	Fortalecer los mecanismos de identificación y detección enfocados a controlar el flujo y/o movimiento de dinero en efectivo y documentos negociables.

Anexos

IX. Plan de acción

X. Agradecimiento

XI. Instituciones participantes y Equipo Técnico

XII. Normativas

PLAN DE ACCION:

Nota: “cuando se imprima van en otro formato”

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (PRELIMINARES) **COMPONENTE DE DETECCIÓN E INTELIGENCIA**

1	Fortalecer las actividades de la UAF en el proceso de recolección de información, análisis y de inteligencia financiera y calidad de la información diseminada.			
	UAF	Incentivar al uso de la plataforma UAF en línea para la recolección de datos.	Enero 2017	Julio 2018
		Capacitar a los usuarios en el uso de dicha plataforma.		
		Crear manuales sobre el uso del sistema para los sujetos obligados.		
		Analizar las bases de datos disponibles a y verificar la calidad de dicha información.		
		Analizar la adquisición de nuevas bases de datos, para obtener mayores insumos para el análisis de la información.		
		Revisar los manuales de procedimientos internos actuales, para mejorar la calidad de la información.		
		Crear mesa de Trabajo conjuntamente entre la UAF y el Ministerio Público, para evaluar la calidad de la información que le suministra y el procedimiento de envío de esta información.		
2	Fortalecer las medidas y procedimientos existentes para mejorar la calidad del análisis e información de los ROS remitidos a la UAF.			
	UAF	Realizar un estudio de la calidad de los ROS recibidos, incluyendo factores subjetivos y objetivos, analizando las principales deficiencias y fortalezas. Analizar los resultados por sector obligado, estableciendo parámetros de mejoras.	Enero 2017	Marzo 2018
		Implementar un sistema continuado de análisis de calidad de los ROS.		
		Revisar los manuales sobre calidad de ROS.		
		Capacitar a los analistas en nuevas técnicas de análisis, para proporcionar mayores insumos a los informes.		
		Organizar capacitaciones sobre la información incluida y la calidad del ROS, a fin de retroalimentar a los Sujetos Obligados.		
		Determinar el contenido de la información que puede ser de utilidad para confeccionar informes de Análisis Estratégicos.		

Agradecimiento:

La República de Panamá extiende su agradecimiento al gobierno de Canadá, por el apoyo financiero destinado a la Asistencia Técnica proporcionado por un equipo de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que nutrió a los miembros de la mesa técnica del país durante el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El apoyo y respaldo de la CNBC, conjuntamente con las instituciones que trabajaron en la consecución de esta Estrategia, aunado al respaldo de todos los sectores económicos y la ciudadanía en general, representa el compromiso que el país mantiene para consolidar un sistema transparente y de cooperación con el mundo para la prevención y represión del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Instituciones participantes:

1. **AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS (ANA):** Es la encargada de administrar las políticas, directrices y disposiciones que regulan el sistema aduanero. Controlar y supervisar operaciones aduaneras, así como el flujo de mercancías que ingresen, permanezcan o salgan del país y aquellas amparadas bajo regímenes aduaneros, definitivos o temporales, depósitos aduaneros, zonas francas y tiendas libres.
2. **COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (CNBC):** Es la encargada de aprobar las estrategias nacionales de riesgo de los delitos BC/FT/FPADM, a fin de tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos nacionales, gestionar los recursos y adoptar las decisiones de aplicación. Además, de dar seguimiento al plan de acción, establecer políticas y asegurar la coordinación en materia de BC/FT/FPADM, entre otras establecidas por ley.
3. **CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD:** Organismo consultivo y asesor del presidente de la República en materia de seguridad pública y defensa nacional, por lo que debe recomendar, formular y evaluar la política y estrategias en materia, al igual que aquellos asuntos que le sean encomendados por el Presidente de la República. Es el encargado de impartir directrices para prevenir, evitar y enfrentar, las actividades de espionaje, de rebelión y de terrorismo y su financiación, entre otros.
4. **DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL / DIVISIÓN DE BLANQUEO:** La labor de la DIJ, en materia de BC/FT, es la de investigar todo lo relacionado a la parte financiera, y comercial, de las personas naturales y jurídicas, objeto de una investigación de Blanqueo de Capitales. Las investigaciones se realizan conjuntamente con las autoridades competentes, diligencias de allanamientos e inspecciones oculares. La División de Blanqueo de Capitales, también realizan asesoramiento a las distintas fiscalías para el desarrollo de las investigaciones en materia financiera, confección del Informe de Actuación Financiera, asistir a las audiencias cuando así se requiere
5. **INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO (IPACOO):** Entre otras, se encarga de supervisar que los sujetos obligados (cooperativas) cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno, a fin de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reglamentaciones. Adoptar un enfoque de supervisión basado en riesgos que le permita al supervisor tener un entendimiento claro de los riesgos de los delitos de BC/FT/FPADM.
6. **INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS:** Tiene a su cargo la supervisión en materia de prevención del BC/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo, a los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión. Imponer sanciones a los sujetos obligados no financieros por el incumplimiento de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y las demás normas que la desarrollan.
7. **MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA (MICI):** Su misión es la Planificación, organización, coordinación, dirección y control de las actividades tendientes a hacer posible la creación, desarrollo y expansión del comercio, la industria, las actividades financieras, la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales en el país, y el cumplimiento de la política de comercio exterior.
8. **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:** Tiene a su cargo todo lo relacionado a la formulación de iniciativas en materia de política económica; la programación de las inversiones públicas y la estrategia

social, el diseño y ejecución de las directrices generales y las tareas específicas del Gobierno sobre Hacienda y Tesorería Nacional; la elaboración, ejecución y control del Presupuesto General del Estado, Crédito Público y modernización del Estado, así como la elaboración y ejecución de la Programación .

- 9. MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB):** Determina las políticas de gobierno y planifica, coordina, dirige y ejerce el control administrativo de las provincias y comarcas indígenas, respetando sus patrones culturales, así como promoviendo su desarrollo.
- 10. ORGANO JUDICIAL (OJ):** Constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca. Son atribuciones de este, la guarda de la integridad de la Constitución, investigar y procesar a los diputados, entre otras establecidas por la Constitución.
- 11. SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS (SENAFRONT):** Institución policial especializada y de carácter permanente, estructurada y organizada para resguardar las fronteras terrestres de Panamá y proteger su soberanía e integridad territorial así como proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentren bajo la jurisdicción del Estado, conservar el orden público, prevenir, reprimir e investigar los hechos delictivos y las faltas que se cometan en sus jurisdicciones.
- 12. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SBP):** Supervisar que los bancos y demás sujetos obligados supervisados por la Superintendencia cumplan con su obligación de establecer políticas, procedimientos y estructuras de controles internos, para prevenir que sus servicios sean utilizados de forma indebida para el delito de BC/FT/FPADM.
- 13. SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ (SMV):** Tiene a su cargo en regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversiones, intermediarios y demás participantes del mercados de valores bajo su competencia, a fin de que cumplan la legislación vigente en materia BC/FT/FPADM.
- 14. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ (SSRP):** Autoridad de regulación, reglamentación, supervisión, control y fiscalización de las empresas, entidades y personas sujetas a la Ley 12 del 3 de abril de 2012 que regula actividad de seguros. Su objetivo fundamental es la protección de los contratantes y el fomento de un mercado de seguros inclusivo, por medio del ejercicio de funciones y actividades que garanticen la solvencia y liquidez de las aseguradoras y el ejercicio de las actividades reguladas en cumplimiento de esta ley y sus reglamentos. Supervisar en materia de BC/FT/FPADM a sus sujetos obligados, como también sancionar en caso de incumplimientos
- 15. UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF):** La UAF, es la encargada de centralizar a nivel nacional los ROS, RTE, que generen o emitan los sujetos obligados definidos por ley, siguiendo los estándares de confidencialidad de la información. Además, tiene la capacidad de recibir y requerir, analizar, mantener, suministrar, proveer, intercambiar, organizar, administrar, preservar y elaborar, todo documento o información financiera necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
- 16. UNIDAD DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO:** La Procuraduría General de la Nación mediante Resolución No. 25 de 4 de abril de 2016 creó la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo para apoyar a los fiscales en investigaciones financieras complejas, desarrollando la investigación patrimonial y asistiendo con la estrategia de investigación criminal de blanqueo de capitales. La Unidad también tiene una misión de coordinación con el objetivo de lograr fortalecer la ejecución de las investigaciones mediante grupos interinstitucionales

con la interacción de la Dirección de Investigación Judicial, la Unidad de Análisis Financiero, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

17. ZONA LIBRE: Institución del Estado, autónoma en su régimen interior, pero sujeta a la vigilancia e inspección del Órgano Ejecutivo y de la Contraloría General de la República en los términos que establezca la ley. Capta servicios y centros de importación, almacenaje, ensamblado, embalaje y reexportación de productos de todas partes del mundo, en especial aparatos eléctricos, productos farmacéuticos, licores, tabaco, mobiliario doméstico y de oficina, productos textiles, calzado, joyas y juguetes.

BORRADOR

Normativas:

El cuerpo normativo en materia contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva está compuesto principalmente por:

No.	Instrumento en materia de BC/ FT/ FPADM y descripción
LEYES	
1	<i>Ley 1 de 1984 por la cual se regula el fideicomiso en Panamá</i>
2	<i>Ley 2 de 1 de febrero de 2011, que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes.</i>
3	<i>Ley 3 de 6 de enero de 1999, por la cual se crea la entidad autónoma denominada Registro Público de Panamá.</i>
4	<i>Ley 4 de 9 de enero de 2009, que regula las sociedades de responsabilidad limitada.</i>
5	<i>Ley 9 de 26 de febrero de 1998, por el cual se reforma el Régimen Bancario y se crea la Superintendencia de Bancos.</i>
6	<i>Ley 10 de 31 de marzo del 2015, que modifica y adiciona artículos al código penal.</i>
7	<i>Ley 11 de 31 de marzo de 2015, dicta disposiciones sobre Asistencia Jurídica Internacional en materia penal.</i>
8	<i>Ley 14 del 2007 que adopta el Texto Único del Código Penal, tipificación BC/FT</i>
9	<i>Ley 18 de 23 de abril de 2015, que modifica artículos de la Ley 47 de 2013, que adopta un régimen de custodia de acciones al portador</i>
10	<i>Ley 22 de 27 de abril de 2015, que modifica el artículo 71 del Código de Comercio, estableciendo que, las personas jurídicas deberán llevar los registros de actas y de acciones</i>
11	<i>Ley 22 de 9 de mayo de 2002, por la cual se aprueba en todas sus partes, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.</i>
12	<i>Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.</i>
13	<i>Ley 25 de 12 de junio de 1995, por la cual se regulan las fundaciones de interés privado.</i>
14	<i>Ley 30 del 8 de noviembre de 1984, por la cual se dictan medidas sobre el contrabando y la defraudación aduanera.</i>
15	<i>Ley 32 de 26 de febrero de 1927 sobre Sociedades Anónimas</i>
16	<i>Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría de la República de Panamá.</i>
17	<i>Ley 34 de 8 de mayo del 2015, modifica y adiciona artículos al código penal</i>
18	<i>Ley 35 de 8 de mayo de 2015, por la cual se aprueba el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionado con la Aviación Civil Internacional</i>
19	<i>Ley 36 de 8 de mayo de 2015 por la cual se aprueba el Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves</i>
20	<i>Ley 41 del 2 de octubre del 2000, adiciona el capítulo VI denominado blanqueo de capitales, al título XII y el título XIII denominado disposiciones finales, al libro II del Código Penal.</i>
21	<i>Ley 47 de 6 de agosto de 2013 por la cual se adopta un régimen de custodia de acciones al portador en la República de Panamá</i>
22	<i>Ley 48 del 23 de junio del 2003, que reglamenta las operaciones de las casas de remesas de dinero.</i>

23	<i>Ley 75 del 3 de diciembre del 2003, por la cual se aprueba la convención interamericana contra el terrorismo.</i>
24	<i>Ley 24 de 21 de julio de 1980 por la cual se crea el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.</i>
DECRETOS EJECUTIVOS	
25	<i>Decreto Ley 1 del 2008 que crea la Autoridad Nacional de Aduanas</i>
26	<i>Decreto Ley 1 del 1999 Ley de Mercados de Valores</i>
27	<i>Decreto Ley 2 del 2008, por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos.</i>
28	<i>Decreto Ley 8 del 2008 crea el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)</i>
29	<i>Decreto Ejecutivo 263 que crea el Consejo de Seguridad Nacional, y dicta otras disposiciones.</i>
30	<i>Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, que reglamenta la Ley 23 de 27 de abril de 2015</i>
31	<i>Decreto Ejecutivo No. 587 de 4 de agosto de 2015, que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 de 27 de abril de 2015</i>
32	<i>Decreto Ejecutivo 324 de 19 de julio de 2016, que crea el departamento contra el terrorismo y el comité de prevención contra el terrorismo y su financiamiento en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional.</i>
33	<i>Decreto Ejecutivo No. 241 de 31 de marzo de 2015, modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo No. 947.</i>
34	<i>Decreto Ejecutivo N° 947 de diciembre del 2014, que reorganiza la UAF.</i>
35	<i>Decreto Ejecutivo No. 361 de 12 de agosto de 2015, que organiza la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros</i>
36	<i>Decreto Ejecutivo 52 del 30 de abril del 2008, Ley Bancaria</i>
37	<i>Decreto Ejecutivo N° 16 del 9 de marzo de 1994, por el cual se reglamenta el formulario especial de ingreso a Panamá con dinero u otros valores por más de 10,000.</i>
38	<i>Decreto de Gabinete 10, del 9 de marzo de 1994, por el cual se requiere que toda persona que ingrese al territorio nacional llene un formulario en que declare los dineros, documentos negociables y valores que traiga consigo</i>
39	<i>Decreto de Gabinete 12 de 29 de marzo de 2016, que dicta disposiciones complementarias al Código Aduanero Uniforme Centroamericano y a su Reglamento.</i>
40	<i>Decreto Ejecutivo No. 587 de 4 de agosto de 2015, que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.</i>
41	<i>Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.</i>
ACUERDOS REGLAMENTARIOS	
42	<i>Acuerdo No. 2 de 1 de febrero de 2017, que modifica los artículos 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 23, 25 y 37 del Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015 sobre las disposiciones relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción</i>

43	<i>Acuerdo No. 2 de 27 de mayo de 2015, por medio del cual se adopta el catálogo de señales de alertas para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.</i>
44	<i>Acuerdo No. 2 del 21 de junio de 2016, por medio del cual se dictan disposiciones sobre Gobierno Corporativo.</i>
45	<i>Acuerdo No. 3 del 27 de julio de 2015, por el cual se fijan los criterios y parámetros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector de seguros para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.</i>
46	<i>Acuerdo No. 4 de 7 de julio de 2015, que dicta la Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas para las actividades del mercado de valores realizadas en o desde la República de Panamá.</i>
47	<i>Acuerdo No. 5 del 12 de octubre de 2016, por el cual se fijan medidas de prevención y control del riesgo de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a productos y servicios que ofrecen los sujetos obligados del sector de seguros.</i>
48	<i>Acuerdo No. 6 de 19 de agosto de 2015, que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores, relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.</i>
49	<i>Acuerdo No. 6 del 12 de octubre de 2016, por el cual se fijan los criterios y parámetros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros para la dependencia en terceros de las medidas de debida diligencia de prevención de blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.</i>
50	<i>Acuerdo No. 7 de 19 de agosto de 2015, por el cual se establecen los requisitos para que las Casas de Valores y las Centrales de Valores actúen como Custodio Local Autorizado de los Certificados de Acciones Emitidas al Portador.</i>
51	<i>Acuerdo No. 7 del 12 de octubre de 2016, por el cual se fijan los criterios y parámetros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros en cuanto a los controles internos de prevención de blanqueo de capitales el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.</i>
52	<i>Acuerdo No. 10 de 15 de diciembre de 2015, que reglamenta el cargo y establece las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y la Ley 23 de 27 de abril de 2015; y se subroga el Acuerdo 9-2001 del 06 de agosto de 2001.</i>
RESOLUCIONES	
53	<i>Resolución JD/No. 08/2015 del 29 de junio de 2015 “Por la cual se ordena a todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Servicios Múltiples o Integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito, así como a cualquier otra Organización Cooperativa que realice la actividad de intermediación financiera, la implementación de</i>

	<i>una Guía de Operaciones Sospechosas y la adopción del Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)”.</i>
54	<i>Resolución JD/10/2015 del 5 de octubre de 2015 “Por la cual se aprueba una guía para la segmentación de todas las cooperativas de primer grado, segundo grado y entidades auxiliares del cooperativismo de la República de Panamá, para el desarrollo y mejoras de las políticas estatales de planificación cooperativista, de fiscalización, inspección y vigilancia del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACCOOP)”.</i>
55	<i>Resolución JD/11/2015 “Por medio de la cual se aprueba el Reglamento Especial, para el cumplimiento de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y Ordena a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Servicios Múltiples o Integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito, así como a cualquier otra Organización Cooperativa que realice la actividad de intermediación financiera, la adopción del presente Reglamento Especial”.</i>
56	<i>Resolución JD/No.1/2016 del 6 de enero de 2016 “Por medio de la cual se aprueba el reglamento de procedimiento administrativo sancionatorio, por infracciones a las disposiciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Servicios Múltiples o Integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito, así como a cualquier otra Organización Cooperativa que realice la actividad de intermediación financiera.”</i>
57	<i>Resolución J.D./N°5/2016 del 22 de septiembre de 2016 “Por medio del cual se aprueba dejar sin efecto Resolución N°JD/04/2015 de 23 de enero de 2015 y se ordena incluir todos los aspectos necesarios en materia identificación del beneficiario final en el Reglamento Especial del Sector Cooperativo de la Ley N° 23 de 27 de abril de 2015”.</i>
58	<i>Resolución JD/06/2016 del 22 de septiembre de 2016 “Por medio del cual se aprueba modificar artículos del Reglamento Especial emitido mediante Resolución J.D./11/2015 del 12 de octubre de 2015 para el cumplimiento de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.</i>
59	<i>Resolución No. 011-016 de 3 de agosto del 2016. Resolución de acceso a la información de conformidad con lo establecido en la Ley 6 de 22 de enero del 2007.</i>
60	<i>Resolución No. 007-015 de 14 de agosto del 2015. Casas de Empeño.</i>
61	<i>Resolución No. 016-016 de 6 de diciembre del 2016. Resolución que modifica la Res. JD-007-015 DE 14/08/2015. Casas de empeño.</i>
62	<i>Resolución No. 014-016 de 6 de diciembre del 2016. Resolución que reglamente el proceso de registro y autorización para las empresas de cumplimiento de acuerdo a la Ley 23 de 2015.</i>
63	<i>Resolución No.006-015 de 14 de agosto del 2015. Empresas de remesas de dinero y casas de cambio sea o no su actividad principal.</i>

64	<i>Resolución 015-015 de 14 de agosto del 2015. Modifica la resolución de remesas.</i>
65	<i>Resolución No. 015-016 de 6 de diciembre del 2016. Resolución que modifica la Res. JD-006-015 DE 14/8/2015, modificado por la resolución JD-015-015 DEL 30/09/2015. Remesas.</i>
66	<i>Resolución No. 001-015 de 14 de agosto del 2015. Empresas promotora, agentes inmobiliarios, corredores de bienes raíces, construcción.</i>
67	<i>Resolución No. 002-015 de 14 de agosto del 2015. Empresas de zona libre de colon, empresas establecidas en Panamá Pacífico, Zonas Franca del Barú y Zonas Francas.</i>
68	<i>Resolución No. 003-015 de 14 de agosto del 2015. Empresas comercialización de Metales preciosos y piedras preciosas y Bolsa de Diamante.</i>
69	<i>Resolución No. 004-015 de 14 de agosto del 2015. Empresas dedicadas a la Compra y Venta de autos nuevos y usados</i>
70	<i>Resolución No. 005-015 de 14 de agosto del 2015. Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollen estos negocios a través de internet.</i>
71	<i>Resolución No. 006-015 de 14 de agosto del 2015. Empresas de remesas de dinero y casas de cambio sea o no su actividad principal.</i>
72	<i>Resolución 017-016 de 6 de diciembre del 2016. Casas de cambio sea o no actividad principal.</i>
73	<i>Resolución No. 008-015 de 14 de agosto del 2015. Empresas de transporte de valores</i>
74	<i>Resolución No. 009-015 de 14 de agosto del 2015. Banco Hipotecario Nacional</i>
75	<i>Resolución No. 010-015 de 14 de agosto del 2015. Sociedades de Ahorro y Préstamos para Vivienda</i>
76	<i>Resolución No. 011-015 de 14 de agosto del 2015. Banco de Desarrollo Agropecuario</i>
77	<i>Resolución No. 012-015 de 14 de agosto del 2015. Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá</i>
78	<i>Resolución No. 013-015 de 14 de agosto del 2015. Lotería Nacional de Beneficencia</i>
79	<i>Resolución No. 014-015 de 14 de agosto del 2015. Abogados, Contadores públicos, Notarios</i>
80	<i>Resolución No. 016-015 de 29 de diciembre del 2015. Procedimiento Sancionatorio</i>
81	<i>Resolución No.005-015 de 14 de agosto del 2015. Adopción del formulario ROS y RTE de la UAF, guía de calidad de reporte.</i>

82	<i>Resolución No.002-016 de 6 de enero del 2016. Declaración Jurada para los reportes de transacciones</i>
83	<i>Resolución No.003-016 de 8 de noviembre del 2016. Formulario de actualización de datos de sujetos obligados.</i>
RESOLUCIONES DE LA INTENDENTE	
84	<i>Resolución No.001-016 de 6 de enero de 2016. Por la cual los sujetos obligados no financieros y profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión deberán adopten las guías de señales de alerta emitidas por la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.</i>
85	<i>Resolución No.002-016 de 6 de enero de 2016. Por la cual los sujetos obligados no financieros y profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión deberán adoptar los formularios de Declaración Jurada para los reportes de efectivo y cuasi efectivo emitidas por la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.</i>
86	<i>Resolución No.003-016 de 8 de noviembre de 2016. Por la cual se ordena a los sujetos obligados no financieros y profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión, a completar el formulario de Actualización de Datos de Sujetos Obligados (ADSO) y remitirlo a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.</i>